



Universidad
de Alcalá

LAS SUCESIONES EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ESPAÑOL

**Análisis del Reglamento 650/2012 de Sucesiones y Certificado
Sucesorio Europeo**

THE SUCCESSIONS IN SPANISH PRIVATE INTERNATIONAL LAW

**Analysis of the Regulation 650/2012 of Successions and
Certificate European Succession**

Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado

Autor: D. HÉCTOR VAQUERO ARROYO

Tutora: Dra. D^a. MONTSERRAT GUZMÁN PECES

Alcalá de Henares, a de febrero de 2017



FACULTAD DE DERECHO

MÁSTER DE ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

“Las sucesiones en el Derecho internacional privado español”

Autor: D. Héctor Vaquero Arroyo

Tutora: Dra. Dña. Montserrat Guzmán Peces

Tribunal de Calificación:

Presidente: _____

Vocal 1º: _____

Vocal 2º: _____

Calificación: _____

Fecha: _____

RESUMEN

Este trabajo presenta un detallado análisis sobre el Reglamento 650/2012, de 4 de julio, que entró en vigor el pasado 17 de agosto de 2015, resultando de gran importancia para el Derecho sucesorio ya que afecta a *“la competencia, ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo”*. Así pues, realizamos una explicación de la situación previa en nuestro ordenamiento. Realizamos un estudio detallado sobre las diferentes cuestiones a las que afecta el Reglamento. Y finalmente pasamos a analizar el certificado sucesorio europeo.

PALABRAS CLAVE

Reglamento europeo. Sucesiones. Reglamento 650/2012. Derecho internacional privado. Certificado sucesorio europeo.

ABSTRACT

This paper presents a detailed analysis of the 650/2012 regulation of 4 July, which entered into force on 17 August 2015, resulting of great importance to the inheritance law since it affects to "competence, applicable law, recognition and execution of public documents in the field of successions mortis causes and to the creation of a European certificate of inheritance". So, we made an explanation of the situation in our legal system. We carry out a detailed study on the different issues that are affected by the regulation. And finally, we had to analyze the European certificate of succession.

KEYWORDS

European regulation. Inheritance. Regulation 650/2012. Private International law. Inheritance European certificate.

ÍNDICE

RESUMEN.....	3
PALABRAS CLAVE.....	3
ABSTRACT.....	3
KEYWORDS.....	3
ÍNDICE.....	4
1. Introducción.....	6
2. Regulación española de fuente autónoma (art. 22 LOPJ y 9.8 CC).....	8
3. Legislación de fuente institucional:.....	11
3.1. El Reglamento 650/2012:.....	11
3.1.1. Foros de competencia.....	11
3.1.1.1. Foro de competencia general.....	11
3.1.1.2. Competencia por elección del foro.....	13
3.1.1.3. Competencia residual.....	14
3.1.1.4. Foro de necesidad.....	15
3.1.2. Tipos de conexiones en ley aplicable.....	15
3.1.3. La autonomía de la voluntad.....	17
3.1.3.1. Límites a la autonomía de la voluntad.....	18
3.1.4. Orden público.....	19
3.1.5. Reenvío.....	20
3.1.5.1. Límites.....	22
3.1.5.2. Efectos.....	23

3.1.6. Reconocimiento.....	24
3.1.7. Ordenamientos plurilegislativos.....	25
4. Certificado Sucesorio Europeo.....	29
4.1. Antecedentes.....	29
4.2. Características.....	31
4.3. Autoridad competente para expedirlo.....	32
4.4. Legitimación y solicitud.....	33
4.5. Contenido.....	35
4.6. Efectos.....	36
4.7. Procedimiento.....	37
4.7.1. Problemática formal del certificado.....	37
4.7.2. Recurso frente a la emisión.....	38
5. Conclusiones.....	39
6. Bibliografía.....	41
7. Sentencias mencionadas.....	43

1. Introducción

La globalización y la creciente inmigración dentro del mundo actual han llevado a la necesidad de hacer una regulación común de las distintas relaciones jurídicas entre sujetos. Esto, en el marco de la Unión Europea, añadido a la progresiva eliminación de los obstáculos a la libre circulación de personas y mercancías, la cada vez mayor movilidad de ciudadanos que dan lugar a la creación de vínculos de carácter laboral, familiar y contractual ha provocado en aumento significativo de las llamadas sucesiones intracomunitarias.

Las enormes dificultades que podría llegar a tener una persona a la hora de planificar su sucesión, eran provocadas por la gran diversidad jurídica respecto a esta cuestión entre los distintos Estados miembros, dando lugar a soluciones diferentes a asuntos sucesorios idénticos. Ejemplos reveladores de ello, pueden ser el Derecho continental con raíz en el Derecho romano frente al sistema anglosajón, o el sistema de certificados alemán frente al sistema notarial español, o en relación a los sistemas de Derecho Internacional Privado, aquellos que se guían por el principio de unidad o por el principio de fraccionamiento (distinguiendo entre sucesión inmobiliarias y mobiliaria).

La necesidad de regulación de las sucesiones transfronterizas no es un tema reciente, ya ha surgido en documentos anteriores al momento que nos ocupa, como el fracasado “Convenio de la Haya de 1989, sobre Ley Aplicable a las Sucesiones por causa de muerte”, que no llegó a entrar en vigor y se encuentra sólo firmado por Países Bajos; el “Informe Dörner-Lagarde”, un estudio de Derecho comparado sobre los problemas de sucesiones transfronterizas existentes en aquel momento, así como una serie de propuestas a adoptar para solucionarlos; el llamado “Programa de la Haya: consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, donde se recoge la necesidad de un instrumento comunitario de materia de sucesiones”; el “Libro Verde: Sucesiones y Testamentos”; la “Propuesta del Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo” y finalmente el propio Reglamento que vendría a continuación.

El presente trabajo tiene por objeto el análisis de todos los aspectos del Reglamento 650/2012, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo.

El Reglamento fue publicado el 27 de julio de 2012 y entró en vigor el 17 de agosto de 2015, salvo los artículos 77 y 78 relativos a la información facilitada al público y sobre datos de contacto, que entraron en vigor el 16 de enero de 2014. Los artículos 79 (lista de información referida en el art. 3.2) ,80 (certificaciones y formularios de los arts. 46, 59, 60, 61, 65 y 67) y 81 (procedimiento de comité) entraron en vigor el 5 de julio de 2012.

El Reglamento está basado en los principios de libre circulación y establecimiento de los ciudadanos, su objetivo es constituir unos procedimientos comunes y crear unos criterios unificados que favorezcan la tramitación de las sucesiones en el marco de Unión Europea. El Reglamento es aplicable en todo el territorio comunitario salvo Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.

A continuación, pasaremos a examinar el sistema autónomo, así como los criterios de competencia y ley aplicable con el objetivo de esclarecer cuestiones ambiguas, y problemas de interpretación y aplicación de la norma.

2. Regulación española de fuente autónoma (art. 22 LOPJ y 9.8 CC)

Comenzamos refiriéndonos a la competencia judicial internacional en el sistema autónomo, yendo a la norma reguladora en nuestro ordenamiento, el art. 22 LOPJ:

“En el orden civil, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes:

2º. Con carácter general, cuando las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a los Juzgados o Tribunales españoles, así como cuando el demandado tenga su domicilio en España.

3º. En defecto de los criterios precedentes y en materia de declaración de ausencia o fallecimiento, cuando el desaparecido hubiere tenido su último domicilio en territorio español; en materia de incapacitación y de medidas de protección de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados, cuando éstos tuviesen su residencia habitual en España; en materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España, así como cuando ambos cónyuges tengan la nacionalidad española, cualquiera que sea su lugar de residencia, siempre que promuevan su petición de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento del otro; en materia de filiación y de relaciones paternofiliales, cuando el hijo tenga su residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español o resida habitualmente en España; para la constitución de la adopción, cuando el adoptante o el adoptado sea español o resida habitualmente en España; en materia de alimentos, cuando el acreedor de los mismos tenga su residencia habitual en territorio español, en materia de obligaciones contractuales, cuando éstas hayan nacido o deban cumplirse en España; en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho del que deriven haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y la víctima tenga su residencia habitual común en España; en las acciones relativas a bienes muebles, si éstos se encuentran en territorio español al tiempo de la demanda; en materia de sucesiones, cuando el causante haya tenido su último domicilio en territorio español o posea bienes inmuebles en España.

La aplicación del Reglamento 650/2012, relativo a las sucesiones mortis causa y el certificado sucesorio europeo supone la derogación de este artículo perteneciente a este Título de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este Reglamento europeo fue publicado el 16 de Agosto de 2012, y resultará de aplicación según lo establecido en el mismo, en su art. 83 donde se recoge que *“las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a la sucesión de las personas que fallezcan el 17 de agosto de 2015 o después de esa fecha.”* Sin perjuicio de otras reglas recogidas para casos concretos en su articulado.

El art. 22 LOPJ resulta derogado perdiendo su función para determinar la competencia judicial internacional en sucesiones, pasando a ser aplicable el Reglamento. Aplicando lo anterior sobre un determinado asunto en materia sucesoria se establece como criterio para determinar el ámbito de los tribunales españoles que el causante haya tenido su último domicilio en España, permitiendo la sumisión expresa o tácita (competencia general), y subsidiariamente que haya fallecido en nuestro país o el grueso de sus bienes se encuentre en el territorio nacional (fuero especial).

Frente al sistema de competencia establecido por el Reglamento, cuyo criterio principal para determinar la competencia general es la residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento, la LOPJ se centraba en el domicilio. Ambos criterios son igualmente válidos ya que en el fondo se busca un vínculo cercano al causante.

Por otro lado, si nos referimos a ley aplicable en el sistema autónomo debemos dirigirnos al art. 9.8 del CC:

***“La sucesión** por causa de muerte se regirá **por la ley nacional del causante** en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento conservarán su validez, aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes.”*

El art. 9.8 CC, al igual que el anterior, resulta derogado perdiendo su función para determinar la ley aplicable en sucesiones, pasando a ser aplicable el Reglamento.

En nuestro sistema se estableció por parte del legislador que la sucesión se regiría por la ley nacional del causante frente a otros criterios como el establecido por el Reglamento. Todo criterio tiene inconvenientes, y el establecido por el Código Civil no es una excepción, si por ejemplo se da la situación de que el causante tenga bienes en un tercer Estado que no acepte la conexión y se rija por otro criterio diferente, o en su caso, la adaptación de la norma sucesoria a la del lugar de los bienes.

No obstante, nuestro ordenamiento establece excepciones a este criterio, permitiendo determinar la ley en otorgamiento de testamento en las sucesiones testadas, o sometiendo a la misma ley que rige el régimen matrimonial los derechos de sucesión del cónyuge viudo.

Como conclusión habiendo analizado ambos preceptos, el Reglamento origina que la competencia judicial internacional de los Tribunales españoles ya no se determine a través de los foros establecidos en los artículos 22.2º y 22.3º de la LOPJ. Quedando inaplicados los foros generales del domicilio del demandado, de la sumisión expresa o tácita y los foros especiales del artículo 22.3º. Lo mismo ocurre con la ley aplicable, quedando regida la sucesión por la ley de la residencia habitual del causante establecido por el Reglamento, salvo que el causante haga uso de su autonomía de la voluntad, frente a la ley nacional del causante. No obstante, la autonomía de la voluntad a pesar de ser un elemento novedoso del Reglamento queda bastante limitada, como veremos más adelante.

3. Legislación de fuente institucional:

4.1. El Reglamento 650/2012¹:

3.1.1. Foros de Competencia

3.1.1.1. Foro de Competencia General:

No deja de ser controvertido que el criterio que determina el foro general sea la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento, a pesar de que los últimos tiempos se ha ido consolidando esta tendencia², siendo un ejemplo claro su uso en materia matrimonial. Para los Estados Miembros, cuyos criterios oscilan entre los Estados que se basan en la nacionalidad y los que se basan en el domicilio, esto es una novedad, que ha determinado en cierta medida la no incorporación de Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.

Como se menciona en el Párr. 23, hay que englobar esta elección dentro de un mayor movimiento por parte de los ciudadanos de la Unión lo que exige dar una solución a las diferentes situaciones que pueden surgir, y por tanto dentro de este contexto la residencia habitual es la conexión que más se adecua.

La residencia habitual se considera como el lugar principal donde se desarrolla la vida y los intereses del causante, donde tiene, generalmente, la mayor parte de sus bienes, así como donde se establece la mayor parte de sus relaciones, siendo determinantes desde el punto de vista de la sucesión, las familiares y patrimoniales, además de que, en su caso, es también donde se encontrarán la mayor parte de sus acreedores.

¹ Fecha de entrada en vigor: 17 de agosto de 2015.

² El origen como punto de conexión de la residencia habitual data desde el Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre competencia de autoridades y ley aplicable en materia de protección de menores. Siendo un ejemplo claro sus arts. 1 y 2, junto con el Convenio de 19 de octubre de 1996 (Véase arts. 5.1 y 15.1) y el Protocolo de 23 de noviembre de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias (Véase art. 3.1).

A nivel comunitario, podemos ver Reglamento (CE) núm. 4/2009, del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos; y Reglamento (UE) núm. 1259/2010 del Consejo, de 20.12.2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial

La “residencia habitual” indica el “arraigo real entre una persona y un concreto medio socio-jurídico” (J.M. Espinar Vicente)³

Como señala el Considerando 24 del Reglamento, la residencia habitual es el centro de interés familiar y social. El hecho de que este radique en un Estado miembro supone la integración real de la persona en un concreto medio social y jurídico concreto. Por lo tanto, tal y como indica Espinar Vicente, la residencia habitual indica “el arraigo real entre una persona y un concreto medio socio-económico”⁴.

Además, hay que precisar que se trata de un concepto real, no jurídico-formal. Se define mediante hechos, no datos jurídicos, o lo que es lo mismo, ficciones del Derecho.

Como ha señalado Espinar Vicente, resulta apropiado “*la Elipse de Van Hoostraten*”, según la cual “la vida de una persona es igual que la de una elipse, puede tener más de un centro”. Se puede dar el caso donde una persona tenga su residencia habitual personal y familiar en el Estado A, y su residencia provisional de carácter profesional, en el Estado A.

Al igual que “la nacionalidad del causante” tiene sus ventajas e inconvenientes. Según la doctrina, sus detractores fundamentan su oposición en tres razones, la primera es lo teórico que es la idea de residencia habitual como centro de vida e intereses del causante, así como núcleo de sus relaciones, suponiendo un impedimento legal por ejemplo si el causante fallece y tiene su residencia habitual en un Estado, y su familia y bienes en otro.

En segundo lugar, la problemática a la hora de determinar qué es residencia habitual. El propio reglamento no ofrece una definición al respecto.

Y, por último, el hecho de que la residencia habitual puede ser fácilmente modificable por parte del causante para evitar normas más restrictivas a su disposición, en el caso de reservas hereditarias⁵.

³ Véase ESPINAR VICENTE, J.M., “Nacionalidad”, Enciclopedia Jurídica Básica, Civitas, Madrid, 1995, pp. 4379-4385; Id.,

⁴ Véase ESPINAR VICENTE, J.M., “Residencia habitual (Derecho internacional privado)”, Enciclopedia Jurídica Básica, Civitas, Madrid, 1995, pp. 5876-5880.

⁵ En contra de este argumento sobre modificabilidad de la residencia habitual, ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., “Las legítimas en el reglamento sobre sucesiones y testamentos”, *Anuario de Derecho internacional Privado*. 2011. Pág. 378.

Habría que preguntarse cómo resuelve el Reglamento los diferentes problemas que pueden surgir a la hora de establecer cuál fue la residencia habitual del fallecido

La problemática se puede resumir en dos supuestos: el traslado de domicilio por motivos profesionales o económicos a un Estado sin continuar manteniendo relaciones sólidas con su país de origen, o, traslado de residencia de un Estado a otro sin afincarse en ninguno.

Para lo cual se establece en el primer supuesto, el Estado donde esté situado el centro de interés familiar y social del fallecido, y en el segundo, se vuelve subsidiariamente a la nacionalidad del causante o el sitio donde estén sus bienes.

Si nos centramos en lo que sí recoge el Reglamento, el Foro de Competencia General viene establecido en el artículo 4:

“Los tribunales del Estado miembro en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento tendrán competencia para resolver sobre la totalidad de la sucesión.”

Como se indica en el Considerando 23, el objetivo de este foro es la de ser un nexo general que suponga una vinculación real entre la sucesión y el Estado miembro competente para conocer de ella. Por lo que *“la autoridad que sustancie la sucesión debe proceder a una evaluación general de las circunstancias de la vida del causante durante los años precedentes a su fallecimiento y en el momento del mismo, tomando en consideración todos los hechos pertinentes, en particular la duración y la regularidad de la presencia del causante en el Estado de que se trate, así como las condiciones y los motivos de dicha presencia”*.

Del propio artículo 4 del Reglamento, se extraen una serie de rasgos:

- El Reglamento exige que el causante tenga su última residencia habitual en un Estado miembro, si el causante en el momento de su fallecimiento tiene la

Donde establece que, aunque el cambio de residencia sea más factible que el de nacionalidad, no cree que el reglamento permita el cambio buscando un régimen más favorable. Teniendo este sus recursos como la llama “cláusula de excepción” para evitar un supuesto fraude de ley, sin tener que transgredir la facultad de elección del causante.

residencia habitual en un Estado no miembro, este foro no se aplica y por tanto no se aplica para determinar la competencia de ningún tribunal de ningún Estado.

- También exige tenga su residencia habitual en un Estado miembro “*en el momento de su fallecimiento*”, es decir, sólo se tendrá en cuenta la última. Resulta intrascendente a efectos del artículo 4 la nacionalidad del causante o las residencias habituales que pueda haber tenido anteriormente.

- Además, es “*sobre la totalidad de la sucesión*”, lo que implica que los Tribunales designados por el foro tienen competencia judicial completa.

Justificación del uso de la última residencia habitual ⁶

Los Tribunales del Estado miembro donde se encuentra la última residencia habitual del causante se encuentra “a priori” en una mejor situación para conocer del litigio.

Dado que lo normal es que la total o mayor parte de los bienes se encuentren en ese Estado miembro donde residía el causante en el momento de su fallecimiento, las sentencias son más fácilmente ejecutables por sus Tribunales.

Al igual que los testamentos, que serán más fácilmente localizables y ejecutables.

Otra cuestión diferente es la facilidad probatoria de la última residencia habitual pudiendo ser conocida sin apenas esfuerzo por terceros (herederos y legatarios) frente al criterio nacionalidad que resulta más “privado”.

3.1.1.2. Competencia por elección del foro

Otra importante novedad del presente Reglamento es la elección del foro. La elección del foro por parte del causante supone implícitamente la exigencia de un plan o proyecto previo de la sucesión, es decir, un testamento u otra forma de disposición. La

⁶ Véase CARRASCOSA GONZALEZ, J., “Reglamento sucesorio europeo y residencia habitual del causante”. Cuadernos de Derecho Transnacional (marzo 2016), ISSN 1989-4570, Vol. 8, Nº 1, pp. 52.

elección del foro ya se incluyó como una posibilidad dentro del Libro Verde de Sucesiones y Testamentos de 2005⁷.

La posibilidad de elección de ley se ha visto siempre como algo peligroso que atenta contra el carácter imperativo del Derecho establecido por los Estados, traducido en materia sucesoria como la posibilidad de que los individuos puedan evadirse legalmente de las llamadas reservas hereditarias.

Aunque, no obstante, cabe la posibilidad de pensar que este punto de vista es lo que ha llevado a las grandes restricciones aplicadas por este Reglamento a la elección. Pudiendo sólo elegir la ley nacional propia del causante y, no por ejemplo donde tenga los bienes situados, la ley de su régimen matrimonial o la misma residencia habitual.

Centrándose en la facultad de elegir, ésta debe hacerse mediante un acto dispositivo, de manera expresa, mediante testamento, o tácita, mediante por ejemplo pacto sucesorio o algún otro acto del cual se desprenda que el causante en vida se acoge a un determinado ordenamiento.

Respecto al problema de la inclusión de la elección tácita, autores como Fontanellas⁸ están en contra de incluirlo ya que según él los inconvenientes son demasiado negativos. El autor cree que pasado un tiempo se podría bajo el amparo del art. 49, utilizar la cláusula de revisión periódica para permitir la disposición de manera tácita, pero según él actualmente no se debe aceptar. Basando todo ello en dos razones: una, que la elección de la ley supone una enorme innovación para la mayoría de sistemas de DIPr, y dos, la escasa formación y experiencia de los diferentes órganos jurisdiccionales de las democracias jóvenes que forman parte de la Unión.

A favor de incluirla estaría Álvarez González⁹, resultando idóneo, ya que el desconocimiento del causante no socavaría su posibilidad de elección.

⁷ Véase LIBRO VERDE Sucesiones y testamentos, SEC. (2005) 270.Pag. 6. Donde se dedican varias cuestiones a este tema.

⁸ Véase FONTANELLAS MORELL, J.M., “La *professio iuris* a las puertas de una reglamentación comunitaria”. *Dereito: Revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela*. Vol. 20, Nº 2, 2011, pág.114.

⁹ ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., “Las legítimas en el reglamento sobre sucesiones y testamentos”, *Anuario español de derecho internacional privado*, Nº. 11, 2011, págs. 369-406.

Además, se favorece que las partes afectadas por la sucesión puedan celebrar un acuerdo relativo a elección del foro a favor de Tribunales del Estado Miembro de la ley elegida, pero este acuerdo queda supeditado a que previamente hubiera una **disposición establecida por el fallecido** sobre elección de la ley aplicable a la sucesión. Lo que puede dar lugar a que el acuerdo no sea suscrito por todos los beneficiarios de la sucesión, pero los que lo han hecho comparezcan ante el tribunal elegido sin impugnar la competencia, en cuyo caso el tribunal sigue conociendo, o que el acuerdo no sea suscrito por todos los beneficiarios de la sucesión y alguna de ellos impugne la competencia, por lo que el tribunal tiene que abstenerse y se aplicará la norma general de competencia del Reglamento.

3.1.1.3 Competencia residual

Con vistas a regular todos los supuestos posibles, y con el objetivo claro de legitimar a los Tribunales de los Estados Miembros sin menoscabar la eficacia del propio Reglamento, éste prevé este supuesto de manera subsidiaria¹⁰ en el caso que el causante no tenga su residencia habitual en ningún Estado Miembro en el momento de su fallecimiento.

El Reglamento nos da dos soluciones a la hora de determinar la competencia, por un lado, establece que son competentes los Tribunales del Estado Miembro donde se encuentren los bienes siempre que el fallecido tuviera nacionalidad de ese Estado en el momento de fallecer, o hubiera tenido su residencia habitual en ese Estado y no hubieran transcurrido más de 5 años cuando se lleva el asunto al tribunal.

Y también prevé el caso de que no se dé ninguna circunstancia de las anteriores, donde las autoridades del Estado donde se encuentren los bienes son competentes para pronunciarse sobre esos bienes, pero NO sobre la totalidad del caudal hereditario.

¹⁰ Véase art. 10 Reglamento.

3.1.1.4. Foro de necesidad

El foro de necesidad¹¹ surge en última instancia porque el Reglamento de nuevo intenta regular todos los supuestos que puedan surgir dando competencia a los Tribunales para conocerlos. Y así determina de manera excepcional, cuando no sea competente ningún Estado Miembro y lo pueda conocer un tercer Estado, pero a este tercer Estado le es imposible conocer del asunto por causa de fuerza mayor (como puede ser por conflictos bélicos, catástrofes naturales, etc.). Se permite la competencia de un Estado Miembro que tenga un **vínculo suficiente** con el litigio (siendo factores concluyentes la nacionalidad y la residencia previa).

3.1.2. Tipos de Conexiones en ley aplicable

Los puntos de conexión establecidos por el Reglamento son la ley nacional del causante y la residencia habitual en el momento del fallecimiento. El sistema establecido permite por un lado la *professio iuris* por la cual el causante puede optar por su ley nacional dando lugar a una mayor seguridad jurídica que la residencia habitual pero también suponiendo un problema por su carácter estático en situaciones en las que el testador pueda haber obtenido otra nacionalidad antes de producirse su fallecimiento. Mientras que a su vez el dinamismo de la residencia habitual en el momento del fallecimiento otorga mayor inestabilidad a este criterio respecto a la nacionalidad, pero permite la mayor integración de los ciudadanos en sus países-destino, incluso en situaciones donde el causante tenga su nacionalidad fuera de la UE. Dentro del contexto que supone que la ley elegida rige a la totalidad de la sucesión evitando conflictos entre diferentes normas.

La residencia habitual como comentábamos anteriormente es el centro de vida e intereses de la persona donde se dan la mayoría de relaciones del sujeto. El hecho de que se busque una mayor integración en la UE supone la elección de este criterio como punto de conexión general.

Esto a su vez, supone una diferencia de criterio respecto a los ordenamientos de los Estados miembros, ya que no era el punto de conexión más utilizado por la mayoría

¹¹ Véase art. 11 Reglamento.

de los Estados. La mayoría de los Estados utilizaban el punto de conexión “nacionalidad del causante”. Tan sólo Bélgica, Países Bajos y Finlandia utilizaban “la residencia habitual del causante” como punto de conexión, estos dos últimos influidos por el Convenio de la Haya de 1989¹².

En lo referente a nuestro ordenamiento y más concretamente en relación al art. 9.8 CC se establecía como único punto de conexión la nacionalidad del causante en el momento de su fallecimiento, siendo parte de la posición mayoritaria de los Estados miembros.

Ventajas del criterio “residencia habitual”¹³

- Efectividad procesal

Teniendo en cuenta la movilidad internacional de los ciudadanos de la Unión Europea, la residencia habitual es el criterio más conveniente. La regla general es que el país donde se reside constituya también la unidad patrimonial y familiar, es decir, donde se tengan los bienes y donde también se encuentren los interesados en el proceso sucesorio. Además del tribunal competente, que al ser el nacional puede decidir directamente sobre los bienes objeto de la sucesión.

- Simultaneidad entre el tribunal competente y la aplicable (*forum-ius*)

La coincidencia entre el tribunal competente para conocer de la sucesión y la ley nacional de ese tribunal como ley aplicable a ella supone un enorme ahorro, tanto en el proceso como a la hora de motivar, evitando situaciones donde se debe aplicar normas e instituciones extranjeras. En definitiva, en consonancia con el Considerando 27 del Reglamento, la aplicación de la ley nacional propia para el tribunal resulta más cómodo y eficaz. Este principio no obstante presenta límites, siendo el más claro cuando el causante elige su ley nacional.

¹² Véase RODRÍGUEZ SANCHÉZ, J.S., “Una introducción al Reglamento de Sucesiones de la UE (desde la perspectiva de los derechos reales sobre bienes inmuebles y el Registro de la Propiedad en España)”, Cuadernos de Derecho Registral, Editorial Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2013, pp. 139-150.

¹³ Véase CARRASCOSA GONZALEZ, J., “Reglamento sucesorio europeo y residencia habitual del causante”. Cuadernos de Derecho Transnacional (marzo 2016), ISSN 1989-4570, Vol. 8, Nº 1, pp. 55-60.

- Principio de proximidad

Partiendo de la idea de que el coste de acceso al contenido del Derecho del Estado donde se reside es menor que al de cualquier otro Estado, el causante puede conocer de manera más sencilla el derecho aplicable a su sucesión y organizar de manera más eficaz y fácil ésta. Lo que implica generalmente unos costes conflictuales menores.

- Carácter externo

La residencia habitual es un punto de conexión de carácter externo, permitiendo que terceros conozcan sin apenas dificultades el lugar de residencia, frente a nacionalidad que es menos evidente y accesible originando consecuencias problemáticas en la sucesión.

- Devaluación del criterio nacionalidad¹⁴

El criterio “nacionalidad” como punto de conexión ha ido perdiendo valor. La razón principal es lo complejo de su adquisición, provocando que muchos emigrantes decidan no adquirirla y mantener la suya a pesar de carecer de lazos con su país de nacimiento. En lo concerniente a los ciudadanos comunitarios, aplicando los Tratados¹⁵, son reconocidos de igual manera que los nacionales de dicho Estado miembro y por ello finalmente no instan la adquisición de la nacionalidad.

- Paradoja de la nacionalidad

En relación al punto anterior, existe una problemática a la hora de aplicar el criterio “nacionalidad” a extranjeros dando lugar a situaciones donde se les aplica su Derecho nacional a pesar de no tener nada o poco que ver con su país de nacimiento, estando integrados perfectamente en el Estado miembro. Pues bien, algunos autores¹⁶ señalan que cuanto más integrados están en un Estado miembro, más relaciones tiene la persona y por tanto en muchas más situaciones se le aplica su ley nacional.

¹⁴ Véase LAGARDE, P., “Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions”, RCDIP, 2012-IV, pp. 691-732; LAGARDE, P., “Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain”, RCADI, 1986, vol.196, pp. 9-238, esp. p. 108; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., “Desarrollo judicial y Derecho internacional privado, Comares”, Granada, 2004, pp. 151-156.

¹⁵ Véase Art. 18 TFUE.

¹⁶ Véase KOLLEWIJN, R.D., “Degenerazione del principio di nazionalità nel diritto internazionale privato moderno”, DI, 1959, vol.XIII, pp. 508-525; LONG, J.V., “Domicil vs. Nationality”, *RabelsZ.*, 1953, pp. 247-262; LOUIS-LUCAS, P., “Existe-t-il une compétence générale du droit français pour le règlement des conflits de lois?”, RCDIP, 1959, pp. 405-441.

- Razones técnicas

Al haberse aplicado ya este criterio al régimen económico matrimonial se ha producido una unión legal, pudiendo en caso contrario verse uno excesivamente o poco protegido frente al otro, dando lugar a situaciones problemáticas.

- Falta de precisión del criterio “nacionalidad”

Dependiendo de la legislación del país, puede llegar a ser muy difícil determinar la adquisición o pérdida de la nacionalidad, sin tener en cuenta los casos de varias nacionalidades o apatridia.

Inconvenientes del criterio “residencia habitual”

Existen ciertos inconvenientes respecto a este punto de conexión, señalados por parte de la doctrina¹⁷, que dan lugar a situaciones:

- En los supuestos donde el causante no tiene residencia habitual, este criterio carece de aplicación.
- En los casos en los que se da una residencia habitual excesivamente variable, se produce cierta inseguridad jurídica a herederos y terceros interesados.
- Se presta a un mayor riesgo de fraude de ley. Se puede dar el caso de que la intención del causante sea evitar cierto ordenamiento más restrictivo hacía su liberta de testar. Lo que puede demandar un mayor control sobre éste.
- Resultan problemáticas las situaciones donde el causante reside de manera intermitente en varios Estados, ya sea por motivos laborales o de otra índole.

¹⁷ Véase, entre otros, SCHURIG, K., “Das internationale Erbrecht wird europäisch: Bemerkungen zur kommenden Europäischen Verordnung, en Festschrift für Ulrich Spellenberg, a cura di J”. Bernreuther e altri, München, 2010, p. 343 ss.; BOROMI, A., “La loi applicable aux successions dans le nouveau droit international privé italien et ses implications dans les relations italo-suisse”, RSDIE, 1996, pp. 479-504.

- La falta de exactitud del Reglamento en relación al concepto residencia habitual.

En relación al último punto, como explica Calvo Vidal, el Consejo del Notariado de la UE aconsejaba, mediante su “*toma de posición*” de 24 noviembre 2010, no definir en el texto legal el concepto de “*residencia habitual*”, para no encapsular la rica realidad sucesoria y ofrecer, en cambio, a los tribunales y autoridades, en los Considerandos del Reglamento, ciertos elementos a modo de “*guía de localización de la residencia habitual*”¹⁸.

El concepto de *residencia habitual* encierra una complejidad frente a la nacionalidad teniendo en cuenta que cada Estado tiene su propio concepto. El problema del Reglamento es que, como hemos señalado, no establece una definición clara de residencia habitual, tampoco una serie de requisitos o en su caso plazos dejando a los tribunales, los notarios y las demás autoridades su aclaración, y añadido esto a la mejora de las conexiones entre países, que permiten que un sujeto tenga cada vez más fraccionado su centro de vida pudiendo trabajar por ejemplo en España, teniendo que ir a rendir cuentas a su empresa con sede en Alemania y viendo a su familia en Bélgica, va a dar lugar a una serie de posibles conflictos.

Los propios Estados que gestionen la sucesión deberán examinar caso por caso para ver si se han cumplido los requisitos establecidos por la Jurisprudencia Europea en materia de residencia habitual. Frente a esto, también pueden darse casos de fraude de ley por parte del causante buscando establecer su residencia habitual donde se de una norma más beneficiosa, ya sea porque no tienen reservas hereditarias o porque se pagan menos impuestos. No obstante, el Reglamento en este caso también podría coartar la voluntad del causante por motivos de orden público.

Por último, la situación de los ordenamientos plurilegislativos también tendría su complejidad dado que, a efectos de la Propuesta del Reglamento, se consideraría cada derecho interno, foral, como un ordenamiento propio que puede hacer frente al propio ordenamiento español y en caso de conflicto el legislador europeo se ha lavado las manos

¹⁸ CALVO VIDAL, I.A., “El Derecho de Sucesiones de la Unión Europea. Ley aplicable y carácter universal de la nueva normativa en materia de sucesiones”. Noticias de la Unión Europea, Nº 328, 2012, pág. 101.

excluyendo del Reglamento este tipo de situaciones remitiendo al sistema de normas de conflicto interno¹⁹.

3.1.3. Autonomía de la Voluntad

Como mencionábamos anteriormente la posibilidad de elección de ley aplicable a la sucesión por parte del causante dentro de una serie de limitaciones, establecidas por el propio Reglamento, y de las que hablaremos más adelante, es otro de los puntos novedosos de este Reglamento. Esta es la manifestación más clara de apuesta por la autonomía de la voluntad por parte del Reglamento, dando a la sucesión un elemento de flexibilidad al permitir una mayor libertad al causante a la hora de testar.

Si nos detenemos en la Propuesta, se nos dice “*cualquier persona podrá designar la ley del Estado cuya nacionalidad posee para que rija la totalidad de la sucesión.*”²⁰. Este precepto en si da una noción bastante simplista y plantea ciertas dudas sobre su puesta en práctica, como pueden ser en los casos de doble nacionalidad.

Ahora bien se puede ver como posteriormente y según ha quedado en el art. 22.2 del Reglamento “*la elección deberá hacerse expresamente en forma de disposición mortis causa, o habrá de resultar de los términos de una disposición de ese tipo.*”, se abre la posibilidad de la elección tácita, y según señala muy acertadamente Álvarez González²¹ favorece la tutela de aquel que desconoce la posibilidad de elección dentro de las limitaciones que se mencionan a continuación, dando a la persona varias posibilidades ya sea mediante testamento o pacto sucesorio²².

¹⁹ Véase arts. 36 y 38 del Reglamento, en relación al art. 28.2 de la Propuesta.

²⁰ Véase art. 17 de la Propuesta del Reglamento de Sucesiones.

²¹ ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., loc. cit., pág. 381.

²² Según el autor la *professio iuris* y la sucesión intestada son perfectamente compatibles (ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., “La *professio iuris* y la sucesión internacional en una futura reglamentación comunitaria”. *Estudios jurídicos en memoria del profesor José Manuel Lete del Río / coord. Por María Paz García Rubio*, 2009, págs. 31-32.)

Volviendo a la figura de la autonomía de la voluntad, en el Reglamento no es plena ya que solo permite la elección al causante de su ley nacional. Esta gran limitación pretende que el causante no perjudique a su voluntad las reservas hereditarias que deba constituir por imponerlas una ley más limitativa a su elección. Esta posibilidad no obstante permite al testador elegir entre varias nacionalidades si el sujeto es titular. Pero, a decir verdad, la permisibilidad de la autonomía es muy limitada, buscando evitar el posible fraude de ley que si podría llegar a dar si se le diese total libertad de elección al causante. Siempre teniendo que establecer el equilibrio entre esta libertad y las normas imperativas establecidas por los Estados Miembros.

El caso de España es bastante curioso respecto a esto, y la aplicabilidad del Reglamento también, ya que las fuentes sucesorias en nuestro derecho son el testamento y la ley, no permitiendo de ninguna manera algún tipo de acto dispositivo, como los llamados pactos sucesorios, pero por otra parte dentro de nuestro Estado plurilegislativo, los pactos sucesorios sí tienen validez dentro de los diferentes derechos forales permitiendo que los pactos bajo aforamiento se materialicen como la elección de esos derechos forales y de manera subsidiaria de nuestra ley por parte del causante.

El Reglamento otorga al testador la facultad para la revocación y modificación de la *professio iuris*. Es decir, se le permite la elección de una nueva ley aplicable, siendo un cambio de su ley nacional al foro general, o por la obtención de una nacionalidad nueva. Si el causante hace testamento en favor de su nacionalidad y luego cambia de nacionalidad, su sucesión sería conforme a la primera.

3.1.3.1.Límites a la Autonomía de la Voluntad

Como se ha mencionado la posibilidad de elección de ley es una de las novedades más significativas, pero ésta se encuentra limitada. Los límites a ésta son, el primer lugar la nacionalidad puesto que sólo permite la elección de la ley nacional, mediante acto dispositivo, rigiendo esta la totalidad de la sucesión.

Por otro lado, el orden público. Los Tribunales competentes para la sucesión pueden descartar la aplicación de normas de terceros Estados por razones de orden público, cuestión que meramente señalamos en este apartado porque será objeto de

tratamiento a continuación. Habría que señalar que se podría dar, por ejemplo, en el caso de vulneración de los derechos hereditarios de los herederos forzosos sin embargo se ha dejado claro que las diferencias entre los sistemas sucesorios de los Estados no son suficientes de por sí para suponer que se pueda considerar que atentan contra el orden público²³.

El propio TJUE ha establecido que el orden público sólo puede utilizarse para “casos excepcionales”.

Y finalmente también se encuentra limitada por la llamada “vinculación suficiente”. Se pretende evitar que el causante elija una ley con vínculos menos estrechos permitiendo casos de fraude o que el causante elija una ley menos restrictiva a su facultad de disposición²⁴, en definitiva, es una exigencia que haya una vinculación suficiente en relación con la sucesión.

En régimen inmobiliario únicamente, el Reglamento permite la aplicación de la ley donde estén situados los bienes, dándose posibles situaciones donde el Estado donde se encuentran pueda restringirlos respecto los tribunales competentes.

3.1.4. Tratamiento del orden público

Esta figura viene recogida en el art. 35 del Reglamento. Es una garantía que tienen los ordenamientos de los Estados miembros, utilizado de manera habitual y que consiste en la exclusión de la ley designada por el Reglamento cuando sea manifiestamente incompatible con el orden público del Estado miembro. Sin entrar en que se considera “manifiestamente”.

En el considerando 24 de la Propuesta, establece que su utilización por parte de los Estados miembros debe dejarse para “*supuestos excepcionales*”. Si observamos su artículo 27, en su apartado primero se recoge que únicamente puede excluirse la aplicación de una ley designada por el propio Reglamento por razón de orden público.

La Propuesta, establece muy claramente la relación entre orden público y legítima. En el apartado segundo del anterior precepto, la Propuesta recoge la previsión de que la

²³ Véase art. 27.2º de la Propuesta del Reglamento de Sucesiones.

²⁴ Véase Considerando 38 del Reglamento.

diferencia de normas sobre las reservas hereditarias no supone necesariamente la consideración de contrario al orden público. Aunque podemos ver como finalmente esta mención no se ha incluido. En nuestro ordenamiento, las reservas hereditarias no son una cuestión de orden público, la razón es su distinto tratamiento por parte de los derechos forales²⁵.

El orden público en materia sucesoria suele entrar en juego cuando hay algún tipo de discriminación en materia sucesoria.

Como señala Calvo Vidal²⁶, hay que apuntar dos consideraciones importantes. La primera es que en ningún caso se determina que se considera orden público y, en segundo lugar, que en caso de que un Estado miembro determinase la inaplicación de una ley por ser contrario a su orden público cuál sería la norma que deberá suplir a ésta, dejando en este último caso al ciudadano en una situación de inseguridad jurídica.

3.1.5. El Reenvío

El reenvío es un instrumento que busca solucionar conflictos negativos de leyes, cuando ningún Estado dispone que sea su ley interna la que es de aplicación. Así se pueden dar situaciones donde el Derecho Internacional Privado reenvía la cuestión a un Derecho extranjero y la norma de conflicto a su vez a otro.

En un principio como señala Calvo Vidal²⁷, la igualdad entre legislaciones de los Estados miembros dentro del marco comunitario por el sistema de normas de conflicto llevaría a priori a una supuesta exclusión del reenvío, tal y como se recogió en la Propuesta en su artículo 26, *“cuando el presente Reglamento establezca la aplicación de la ley de un Estado, se entenderá por tal las normas jurídicas vigentes en ese Estado con exclusión de las normas de Derecho internacional privado”*²⁸.

²⁵ Véase al respecto STS nº 887/1996, Sala 1ª, de 15 de Noviembre, RJ 1996/8212.

²⁶ CALVO VIDAL, I.A., “El Derecho de Sucesiones de la Unión Europea. Ley aplicable y carácter universal de la nueva normativa en materia de sucesiones”. Noticias de la Unión Europea, Nº 328, 2012, pág. 105.

²⁷ CALVO VIDAL, I.A., loc. cit. pág. 103.

²⁸ El artículo 26 de la Propuesta inicial de Reglamento.

Siguiendo lo recogido en el Convenio de la Haya sobre ley aplicable a las sucesiones por causa de muerte, particularmente su art. 4, el Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo de 16 de octubre de 2006, señala en su recomendación sexta la necesidad de un cambio en materia de remisión. Tras otras varias enmiendas, se inclinaron a favor de la admisión controlada del reenvío²⁹, pasó a materializarse de tal forma en el propio Reglamento.

Desde la perspectiva del Reglamento, el art. 34 permite la admisión parcial de este instrumento jurídico. A pesar de que en la Propuesta se daba una exclusión total del mismo³⁰, a imitación de anteriores (Roma I, II, y otros)³¹, buscando evitar la posible ruptura de la unidad de la sucesión. Su permisibilidad depende fundamentalmente de que el Reglamento designe la aplicación de la ley de un Tercer Estado, además de algunos requisitos como que por ley se prevea el reenvío a la ley de un Estado Miembro o Tercer Estado.

En su apartado segundo esta disposición establece una serie de exclusiones, limitando aún más el reenvío. El Reglamento excluye el reenvío cuando la ley aplicable sea la ley designada por *professio iuris*, cuando la ley designada por cláusula de excepción sea la de los vínculos más estrechos, cuando se dé la ley aplicable a la validez formal de las disposiciones mortis causa, si la ley aplicable es la de la residencia habitual del aceptante o sea la renuncia de herencia.

De cualquier manera, el Reglamento permite el reenvío en dos casos concretos. Si un Tercer Estado designa la aplicación de la ley de un Estado Miembro (Art. 34.1.a) y si un Tercer Estado designa la aplicación de la ley de otro Tercer Estado (art.34.1.b). No obstante, hubiera sido deseable una mayor claridad a la hora de redactar el citado artículo para evitar en aras de una mayor seguridad jurídica.

²⁹ Véase evolución, desde Enmienda 190 presentada por Diana Wallis. La aprobación de un párrafo adicional al art. 26 a propuesta de Kurt Lechner. Enmienda 216 presentada por Marielle Gallo. Buscando permitir el reenvío únicamente cuando la norma de conflicto de un Estado no miembro designe como ley aplicable la de un Estado miembro.

³⁰ Véase art. 26 de la Propuesta del Reglamento de Sucesiones.

³¹ Véase art. 20 Roma I, art. 24 Roma II.

3.1.5.1.Límites

El más obvio es si el causante establece la ley aplicable para su sucesión, puesto que el reenvío quedaría excluido de manera automática no pudiendo establecerse por este una ley diferente a la elegida yendo en contra del propio Reglamento, que se basa de manera inequívoca en la autonomía de la voluntad del causante.³²

Uno de los principios básicos que rigen la sucesión es el principio de unidad siendo otro límite para el reenvío cuando un Estado cuya ley haya sido designada utilice el reenvío a otro Estado en el cual se produzca el fraccionamiento de la sucesión vulnerando este principio.

Por ejemplo, cuando se produzca el reenvío a un Estado que aplique el Reglamento o Tercer Estado, como en el caso de Reino Unido donde rige *lex rei sitae*, dando lugar a un reenvío parcial y a su vez al fraccionamiento de la sucesión.

De manera clara, se deberá rechazar por parte de los Tribunales el uso del reenvío cuando se pueda trasgredir estos principios provocando un fraccionamiento de la sucesión³³.

En este sentido el Tribunal Supremo se ha pronunciado en diversas ocasiones, en Sentencias como la de 15 de Noviembre de 1996 o la de 21 de Mayo de 1999, donde se ha concluido que el reenvío daba lugar a la ruptura de la sucesión³⁴ vulnerando los principios de unidad y universalidad. Al contrario de los anteriores, en la Sentencia de 23 de Septiembre de 2002, la Sala acepta el reenvío de primer grado, aplicando la ley

³² Véase Considerando 57 del Reg. CALVO VIDAL, I.A., loc. cit., p.104.

³³ LAFUENTE SÁNCHEZ, R., “Hacia un sistema unitario europeo en materia de ley aplicable a las sucesiones”. *Cuadernos de derecho transnacional*. Vol. 5, N°. 2, 2013, págs.366. Donde el autor lanza esta pregunta: ¿Se admitirá el reenvío por los Tribunales de los Estado miembros cuando éste va en contra de los principios de unidad y universalidad de la sucesión? Según el autor se debería rechazar por parte de los Tribunales su uso.

³⁴ - STS nº 887/1996, Sala 1ª, de 15 de Noviembre, RJ 1996/8212. Se da una sucesión internacional donde un norteamericano fallecido en Reino Unido, con un inmueble en España deja todos sus bienes a su hermano, pero sus hijos solicitan la nulidad del testamento en base a sus legítimas reconocidas por el Derecho Español.

- STS nº 436/1999, Sala 1ª, de 21 de Mayo, RJ 1999/4580. Un inglés fallecido en España con su residencia habitual y un inmueble en este país deja todos sus bienes a su segunda esposa y los hijos demandan en virtud de sus legítimas.

española por ser el lugar donde radican todos los bienes del causante en virtud de la ley inglesa, respetando el principio de unidad³⁵.

Y por último de manera excepcional, cuando vaya en contra del orden público³⁶ del Estado Miembro de forma manifiestamente incompatible. En propio Reglamento establece en su Considerando nº 58, que no podrá utilizarse vulnerando lo recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular su art. 21, relativo a la discriminación.

3.1.5.2.Efectos

Desde la perspectiva española, las consecuencias en la aplicación del reenvío dan lugar a las siguientes situaciones:

Si un Tribunal de un Estado Miembro designa como aplicable la ley de otro Estado Miembro, salvo aquellos en los cuales no es de aplicación el Reglamento, la figura del reenvío quedará inaplicable ya que se utilizará la misma norma de conflicto para todos y resultará de aplicación el mismo ordenamiento.

Si la ley designada es la de un Tercer Estado, o un Estado donde no se aplique el Reglamento habrá que atender a las normas de Derecho Internacional Privado de ese Estado, pudiendo darse las situaciones de reenviarse a un Estado Miembro donde sea de aplicación el Reglamento o no, o un Tercer estado.

También se puede plantear la aplicación del llamado reenvío de segundo grado como consecuencia de que un Tercer Estado aplique su ley, por lo que desde nuestro punto de vista el art. 12 de nuestro Código Civil queda inaplicable por el art. 34 del Reglamento³⁷.

³⁵ Véase STS nº 849/2002, Sala 1ª, de 23 de Septiembre, RJ 2002/8029. En su FJ Segundo.

³⁶ Véase art. 35 del Reglamento.

³⁷ «La remisión al derecho extranjero se entenderá hecha a su ley material, sin tener en cuenta el reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la española» contraviene lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento cuando establece que las disposiciones de Derecho internacional privado del Estado designado en virtud de la aplicación del Reglamento pueden prever el reenvío a «la ley de otro tercer Estado que aplicaría su propia ley». LAFUENTE SÁNCHEZ, R., loc. cit., pág. 366.

3.1.6. El Reconocimiento

Al igual que en otros Reglamentos³⁸, se pierde la figura del exequátur, en relación al reconocimiento y aplicación de las resoluciones judiciales, en otro Estado miembro. Para el reconocimiento en los otros Estados miembros de las resoluciones dictadas, se requiere que, a instancia de parte, se produzca la emisión del correspondiente certificado declarando su fuerza ejecutiva.

La denegación del reconocimiento de las resoluciones también puede darse basado en unos motivos muy restringidos³⁹, aunque bajo ningún concepto respecto al fondo:

- Cuando el reconocimiento fuera manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido.
- Cuando se dictasen en rebeldía del demandado sin que se le haya entregado a éste la cédula de emplazamiento o documento equivalente, de forma tal y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse, a menos que no hubiera recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo.
- Cuando fueran inconciliables con una resolución dictada en una causa entre las mismas partes en el Estado miembro requerido.
- Cuando fueran inconciliables con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado miembro o un Estado tercero entre las mismas partes en un litigio que tenga el mismo objeto y la misma causa, cuando esta última resolución reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido.

La solicitud debe presentarse ante el Tribunal o la autoridad competente del Estado miembro de ejecución. Como regla general, será competente el del domicilio de la parte ejecutada o del lugar de ejecución.

³⁸ Véase Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008. La novedad fue precisamente su supresión lo que supone las resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro que allí tengan fuerza ejecutiva la tendrán también en los demás Estados miembros sin necesidad de declaración alguna de ejecutoriedad, y podrán ser ejecutadas en los mismos como si de una resolución nacional se tratara.

³⁹ Véase Art. 40 del Reglamento.

Las modalidades de presentación de la solicitud se determinarán con arreglo a la ley del Estado miembro de ejecución. La solicitud deberá ir acompañada una copia de la resolución que reúna los requisitos necesarios para ser considerada como auténtica y de la certificación expedida por el Tribunal o la autoridad competente del Estado miembro de origen mediante el formulario del art. 81.2.

De no presentarse la certificación, el Tribunal o la autoridad competente podrá fijar un plazo para su presentación, además de su traducción.

La fuerza ejecutiva se declara una vez cumplido el procedimiento, notificándose la resolución y pudiendo revocarse cuando sea manifiestamente contraria al orden público. Las partes podrán recurrir esta resolución ante el Tribunal designado en un plazo 30 días a partir de su notificación, salvo que el domicilio del ejecutado este en otro Estado miembro del declarado. La resolución de este recurso sólo se desestimaré por alguno de los motivos de denegación mencionados.

3.1.7. Ordenamientos plurilegislativos

El Reglamento también tiene en cuenta estos tipos de ordenamientos e intenta, de la mejor manera posible, responder a la necesidad de establecer que Derecho Sucesorio es aplicable cuando un Estado miembro tiene diferentes sistemas jurídicos, como es el caso de España.

El Reglamento contiene tres disposiciones en su articulado referentes a estos ordenamientos, arts. 36 a 38. Conforme al art. 36.1 cuando se designe la ley de un Estado Miembro con diferentes unidades territoriales deberá determinarse la ley aplicable por las normas de conflicto internas del propio Estado. En caso de no existir dichas normas, hay que atender a una serie de conexiones establecidas por el art. 36.2. Desde nuestra perspectiva, nuestro país sí tiene toda una serie de normas de conflicto internas establecidas en los arts. 13 a 16 de nuestro Código Civil. El art. 37 hace referencia a los conflictos por razón de la persona, y por último el art. 38 exime a los Jueces de dichos Estados a aplicar el Reglamento en conflictos de leyes de naturaleza interna, permitiendo a nuestros Jueces aplicar el Código Civil para su resolución.

En un principio, en la Propuesta se optó por considerar cada Derecho foral como un sistema jurídico de un Estado propio permitiendo ir directamente a la ley foral sin

necesidad de utilizar el sistema de normas de conflicto⁴⁰. Esto sin duda, fue muy criticable puesto que daba lugar a la supresión del sistema de normas de conflicto del Estado Miembro, desaprobado por gran parte de la doctrina.

Como señalan Quinzá Redondo y Christandl⁴¹, las críticas doctrinales a la Propuesta se fundaron en la ruptura de la unidad de soluciones conflictuales del sistema tradicional y en la inadecuación del sistema establecido por la Propuesta para regular la aplicación de la *conexión nacionalidad*.

El sistema de soluciones conflictuales se estableció en nuestro ordenamiento desde el Código Civil de 1889, donde su art. 14 imponía la aplicación de los arts. 9 a 11 a los supuestos internacionales, pero además también a los interregionales.

Por otro lado, cobró relevancia que la aplicación del Reglamento, en base a la Propuesta, no suponía únicamente un cambio en la aplicación de ley nacional a la de residencia habitual. El propio art.9.8 CC quedaría aún vigente en base a la aplicación de la ley de vecindad civil para los supuestos internos, estableciendo la ley de unidad territorial aplicable al supuesto.

De esto se desprende la creación de dos sistemas conflictuales diferenciados, por un lado, el de la Unión Europea, y por otro el Estatal que se aplicaría para conflictos internos⁴². Siendo determinante aquí el concepto de “*sucesión internacional*” para ver si el supuesto se debe regir por uno o por otro sistema, y desgraciadamente queda sin respuesta por parte de la Propuesta y el Reglamento. Si vamos a documentos anteriores⁴³ se delimita, pero no se define de manera rotunda, quedado a interpretación por parte de nuestra doctrina en un sentido amplio, y como indican acertadamente Quinzá Redondo y Christandl⁴⁴, “*entendiendo que la distinta residencia habitual o nacionalidad de los herederos en relación con el causante, o el matrimonio del mismo con una persona de*

⁴⁰ Véase art. 28.1 de la Propuesta del Reglamento de Sucesiones.

⁴¹ QUINZÁ REDONDO, P. y CHRISTANDL, G., “Ordenamientos plurilegislativos en el Reglamento (UE) de Sucesiones con especial referencia al ordenamiento jurídico español”. *Revista para el Análisis del Derecho*, N° 3, 2013, págs. 12-14.

⁴² En este sentido, GARAU JUANEDA, 2006, p.163.

⁴³ Véase LIBRO VERDE Sucesiones y testamentos, COM (2005) 65 final. “*La creciente movilidad de las personas en un espacio sin fronteras interiores, así como el aumento del número de uniones entre nacionales de Estados miembros diferentes, acompañadas a menudo de la adquisición de bienes situados en territorio de varios países de la Unión, complican enormemente la sucesión*”

⁴⁴ QUINZÁ REDONDO, P. y CHRISTANDL, G., loc. cit., pág. 13.

distinta nacionalidad o residencia producía directamente la aplicación del Reglamento. Pues bien, siendo esto así, quedó demostrado que la internacionalización de una sucesión provocaba mayores perjuicios a los españoles que al resto de ciudadanos de los Estados Miembros.”

Respecto a la inadecuación del sistema de la Propuesta para la regulación de la aplicación de la *conexión nacionalidad*, no se establece por parte del documento cuál de los derechos civiles existentes en nuestro país resultaría de aplicación cuando el causante elija su ley nacional⁴⁵.

Si vamos a la situación donde un ciudadano español con residencia habitual en otro Estado miembro decide ejercer su *professio iuris*. En este caso, ¿se puede permitir elegir cualquiera de los derechos forales existentes?, o tal vez debe elegir únicamente aquel que se establece en su vecindad civil, o en última instancia se ha decantado por el derecho civil común. Esta falta de especificación ha llevado a un vacío legal duramente criticado. Pese a ello hay autores que determinan que lo más normal sería la elección de aquel derecho que rige en su vecindad civil⁴⁶, actuando esta como su nacionalidad por lo que no tendría el menor sentido que la ley aplicable fuese la de otra vecindad.

A pesar de lo anterior, el Reglamento intenta dar soluciones mediatas distinguiendo entre tres tipos de sistemas.

El trato a los conflictos de leyes de carácter territorial, parte de la premisa por parte del Reglamento de que los Estados Miembros que adolecen de éstos pueden tener su propio sistema de resolución, remitiéndose al mismo. De manera subsidiaria, para aquellos Estados Miembros que no dispongan de la posibilidad de dar una solución a estos conflictos o su sistema resulte inoperante, el Reglamento da una solución en función de cómo se haya determinado la ley sucesoria: por residencia habitual del causante, nacionalidad del causante y otros.

El art. 36.2.b) establece que para la residencia habitual se tendrá como referente en caso de conflicto la ley de la unidad territorial. En el apartado b, para la nacionalidad se hace uso de la cláusula de los vínculos más estrechos, y en el resto de los casos se habla del territorio donde se encuentre el elemento relevante.

⁴⁵ Defendido por ARENAS GARCÍA, 2011, pag.589 y FONTANELLAS MORELL, 2011, pag.139.

⁴⁶ FUGARDO ESTEVILL, 2010, pág. 126, y FONT Y SEGURA, 2011, págs. 130-131.

Para la ley aplicable a la validez formal de las disposiciones mortis causa, se recurre de nuevo a las normas de conflictos internas del propio Estado miembro. Y subsidiariamente a la ley que presente un vínculo más estrecho.

Y finalmente, en los conflictos de leyes de carácter personal (art.37), que consisten en la existencia de un sistema jurídico propio de un determinado colectivo, de nuevo nos obliga a ir a las normas internas de resolución de conflictos del Estado miembro. Y de manera subsidiaria al criterio de vínculo más estrecho.

A continuación, el siguiente precepto⁴⁷ se establece que los Estados miembros no están obligados a aplicar el Reglamento para resolver los conflictos de leyes internos, haciendo necesario según algunos autores haber establecido una cláusula de salvaguardia del Derecho interregional ante el aumento de competencias comunitarias⁴⁸. Este artículo es innecesario ya que puede dar lugar a errores y confusiones, produciendo una incoherencia estructural⁴⁹.

El Reglamento otorga, previo permiso de los Estados Miembros, la facultad de ser utilizado para resolución de conflictos de leyes internos⁵⁰.

4. El Certificado Sucesorio Europeo

El Certificado Sucesoria Europeo (de ahora en adelante CSE) es un documento de ámbito comunitario destinado a adquirir gran importancia por su utilidad a la hora de favorecer las sucesiones internacionales. Hay que aclarar que no tiene carácter imperativo ni pretende sustituir a los documentos internos de los Estado miembros, lo que persigue es solucionar los obstáculos que surgen respecto a las sucesiones donde concurren elementos extranjeros.

⁴⁷ Véase art. 38 de la Propuesta del Reglamento de Sucesiones.

⁴⁸ Véase entre otros, ÁLVAREZ RUBIO, 2002, pp. 329-330.

⁴⁹ QUINZÁ REDONDO, P. y CHRISTANDL, G., loc. cit., pág. 16.

⁵⁰ Análisis respecto a los pactos sucesorios. RODRÍGUEZ-URÍA SUÁREZ (2010), posible aplicación de la norma europea a los conflictos interregionales.

4.1. Antecedentes

Su origen como señala Gómez-LaFuente⁵¹ viene dado por la globalización y los movimientos migratorios intercomunitarios que han dado lugar a relaciones sucesorias intracomunidades, como se señala en documentación previa al Reglamento y varios autores que han trabajado en el tema⁵².

El mismo autor señala acertadamente que la diversidad legislativa provoca serias dificultades para los herederos y acreedores del causante extranjero en el ejercicio de sus derechos cuando no concuerdan las leyes aplicables ni el lugar de ejecución, además de problemas de competencia jurisdiccional.

La misma Conferencia de la Haya desde sus orígenes ha prestado especial atención a las cuestiones de movilidad y sucesiones, las mismas que generan cierta inquietud en la comunidad de Derecho Internacional Privado, prueba de ello es el fracaso que supuso el Convenio sobre la ley Aplicable a las Sucesiones por causa de Muerte, de 1 de Agosto de 1989, sólo suscrito en aquel entonces por Países Bajos.

Los diferentes modelos que se barajaron fueron, el reconocimiento, sin más, de documentos extranjeros, siguiendo el modelo suizo, o por otro lado la creación de un certificado europeo *ad hoc*, siendo ésta última la que ha prosperado.

El simple reconocimiento genera en la práctica bastantes problemas, razón de ello es de nuevo la diversidad legislativa, como por ejemplo la desigualdad en la protección y legitimación de herederos y terceros, o los distintos tipos de prueba de cualidad de heredero según cada Estado miembro, siendo en unos judicial, con o sin fuerza de cosa juzgada, y otros notarial, con prueba de hechos y daños y perjuicios en su caso⁵³. La doctrina señala su utilidad para casos puntuales pero sostiene que es inviable como sistema europeo⁵⁴.

⁵¹ GIMENO GÓMEZ-LAFUENTE, J.L., “Certificado Sucesorio Europeo”, *Revista Crítica de derecho Inmobiliario*, nº 741, págs. 117.

⁵² Consultar amplia bibliografía alemana. Desde nuestra perspectiva, VIÑAS, R. y GARRIGA, G. (Madrid, 2009), y RODRIGUEZ BENOT, G. “La acreditación de la cualidad de heredero de una herencia internacional: el certificado sucesorio europeo” págs. 175-218.

⁵³ Véase art. 730.5 Code Civil Français.

⁵⁴ Dörner, H. y Lagarde, P. “*Étude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions dans les Etats membres de l’Union Européenne. Étude pour*

La idea del CSE se materializó en 2005 cuando la Comisión elaboró el Libro Verde de sucesiones y testamentos. Particularmente en las cuestiones 30, y 33 a 35, donde se menciona la necesidad de creación de documentos de ámbito comunitario.

A nivel interno actualmente en Europa existen varios modelos de sistemas efectivos. En países como Alemania o Austria, está implementado un sistema de certificados judiciales. Existen también otros sistemas, de inventarios privados como en Suecia o Finlandia, y nuestro sistema notarial basado en el testamento, presente también en Francia. Con la excepción de Reino Unido, que no tiene un documento como tal, sino que un tercero debe administrar la herencia, abonando las deudas si las hubiera y haciendo frente a otras responsabilidades antes de pasar la propiedad a los herederos. En todos existe un instrumento sucesorio. Por supuesto, no todos tienen la misma forma, contenido, efectos y significado generando desigualdades como hemos mencionado antes.

La consecuencia más directa es la diferenciación en la consideración de la condición de heredero. Ello hace que muchas veces los interesados en una sucesión con bienes en varios Estados deban adquirir varios documentos correspondientes al modelo de cada Estado, dificultando enormemente la liquidación de la herencia⁵⁵. Es por ello que se ha buscado la manera de facilitar las cosas, intentando buscar un criterio unificador.

Ante esta situación el legislador europeo tenía dos opciones, reconocer todos los modelos a nivel europeo, o crear un documento nuevo. Algo que se desprende necesario es la creación de Registro Europeo de últimas voluntades, al margen del reconocimiento de cada registro nacional.

4.2. Características

Volviendo al propio CSE, se trata de un título acreditativo de la condición de heredero, legatario con derecho directo sobre la herencia, ejecutor testamentario o

la Commission des Communautés Européennes". Direction Générale Justice et Affaires intérieures, págs. 107 y sigs.

⁵⁵ REQUEJO ISIDRO, M., "*El certificado sucesorio (o de heredero) europeo: propuestas de regulación*". *Diario La Ley*, Nº 7185, Sección Doctrina, 2009, Pág. 4.

administrador de la herencia. Lo que busca en definitiva es solucionar los problemas relativos al reconocimiento y ejecución.

Basándonos en el Considerando 67 del propio Reglamento, *“el certificado sucesorio europeo que se expedirá para su uso en otro Estado miembro. Conforme al principio de subsidiariedad, el certificado no debe sustituir a los documentos que puedan existir con efectos similares en los Estados miembros.”*, se respeta el título sucesorio nacional, subsistiendo ambos documentos.

Cumpliendo el art. 62.3 del Reglamento, siendo el primero insustituible. Sin entrar a cuestiones como en caso de que ambos tengan información contradictoria a cuál se debe atender.

Principales características⁵⁶:

- Se expedirá para ser utilizado en otro Estado Miembro.
- No tiene carácter obligatorio.
- Surtirá sus efectos en todos los Estados miembros sin necesidad de ningún procedimiento especial.
- Tiene efecto probatorio en: la cualidad y los derechos de cada heredero o, legatario y sus respectivas cuotas hereditarias; la atribución de los bienes concretos que formen parte de la herencia a éstos, y las facultades de la persona mencionada en el certificado para ejecutar el testamento o administrar la herencia.

4.3. Autoridad competente para expedirlo

El certificado será expedido por los órganos competentes, a tal efecto el art. 4 del Reglamento establece que son competentes, *“los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio tuviera su residencia habitual el causante en el momento de su fallecimiento...”*, en relación con el art. 3.2, *“A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por “tribunal” todo órgano judicial y todas las demás autoridades y profesionales del Derecho con competencias en materia de sucesiones que ejerzan*

⁵⁶ Véase CASADO ROMÁN, J., “La nueva regulación comunitaria en materia de sucesiones”. *Actualidad Civil*, nº2, Sección A fondo, 2013. Págs. 21-22.

funciones jurisdiccionales o que actúen por delegación de poderes de un órgano judicial, o actúen bajo su control, siempre que tales autoridades y profesionales del Derecho ofrezcan garantías en lo que respecta a su imparcialidad y al derecho de las partes a ser oídas, y que sus resoluciones, dictadas con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que actúan:

a) puedan ser objeto de recurso o revisión ante un órgano judicial, y

b) tengan fuerza y efectos análogos a los de la resolución de un órgano judicial sobre la misma materia.

Los Estados miembros notificarán a la Comisión las autoridades y los profesionales del Derecho a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 79” además de otra autoridad que, en virtud del Derecho nacional, sea competente para sustanciar sucesiones mortis causa.

Autores como Gomez-LaFuente destacan la importancia de las intervenciones del Notariado Europeo (UINL), para ser incluidos como competentes para expedir los certificados, aligerando la carga de trabajo de los juzgados⁵⁷.

Al final consiguió reformar el actual artículo 64 del Reglamento (37 de la Propuesta) quedan como autoridad expedidora, además de los Tribunales,

“b) Otra autoridad que, en virtud del Derecho nacional, sea competente para sustanciar sucesiones mortis causa”.

Fue decisiva la sentencia del TCE, de 24 de mayo de 2011 (recurso C-54/08)⁵⁸ en la que, entre otras cosas, se dice que: *“A pesar de que el planteamiento de la Comisión se limite a atacar una discriminación por razón de nacionalidad, la cuestión que subyace a este asunto es significativamente más compleja. En efecto, estos procedimientos van encaminados a que el Tribunal de Justicia declare que la función notarial latina, con el perfil que le caracteriza en un número significativo de Estados miembros, queda comprendida dentro del ámbito de la libertad de establecimiento, al no estar relacionada con el ejercicio del poder público”.*

⁵⁷ GIMENO GÓMEZ-LAFUENTE, J.L., “Certificado Sucesorio Europeo”, *Revista Crítica de derecho Inmobiliario*, nº 741. Pág. 125.

⁵⁸ La sentencia declaró que la República Federal de Alemania (de igual manera Austria, Luxemburgo, Portugal, Grecia y Bélgica) habían incumplido las obligaciones establecidas en los arts. 43 y 45.1 CE al adoptar una medida como la prevista en el artículo 5 del código federal del notariado, modificado por la Ley de 26 de marzo de 2007, por la que se limita el acceso a la profesión notarial exclusivamente a los nacionales alemanes.

4.4. Legitimación y solicitud

El tema de la legitimización para solicitar el certificado provocó que desde un primer momento se establecieran dos posiciones enfrentadas. Algunos abogaban por una postura más restrictiva, sólo permitiendo que lo solicitasen aquellos sujetos que debían hacerse cargo de la sucesión (administradores), y a quienes correspondiese la sucesión (herederos y legatarios), dejando al resto de interesados la posibilidad de obtener copia⁵⁹. Otros se decantaban por permitírselo a todo aquel que tuviese un interés legítimo (incluyendo por supuesto a los acreedores de la herencia)⁶⁰.

El certificado se expedirá a instancia del solicitante⁶¹. En la solicitud constará la siguiente información: (acompañada de todos los documentos pertinentes, en original o copias)

- Datos del causante, datos del solicitante, datos del cónyuge o de la pareja del causante y, si procede, de su excónyuge o sus excónyuges o de su expareja o sus exparejas, datos de otros posibles beneficiarios en virtud de una disposición *mortis causa* o de la ley.
- Motivo por el que se solicita el certificado.
- Los datos del Tribunal u otra autoridad competente que sustancie o haya sustanciado la sucesión.
- Los motivos en los que el solicitante fundamente su derecho.
- Si el causante había otorgado una disposición *mortis causa*.
- Si el causante había celebrado capitulaciones matrimoniales o un contrato relativo a una relación que pueda surtir efectos análogos al matrimonio.

⁵⁹ Véase art. 6.1. npp. nº 41 del Documento de Reflexión.

⁶⁰ Ambas posibilidades constan en el art. 6.1.1 del Documento de Reflexión.

⁶¹ Art. 63 del Reglamento, “*se expedirá para ser utilizado por los herederos, legatarios que tengan derechos directos en la herencia y ejecutores testamentarios o administradores de la herencia que necesiten invocar, en otro Estado miembro, su cualidad de tales o ejercer sus derechos como herederos o legatarios, o bien sus facultades como ejecutores testamentarios o administradores de la herencia*”

- Una indicación de si alguno de los beneficiarios ha declarado que acepta la herencia o renuncia a ella.
- Una declaración de que no existe ningún litigio pendiente relativo a los extremos que vayan a ser certificados.
- Cualquier otra información que el solicitante considere útil a los efectos de la expedición del certificado.

Una vez verificados los datos y demás documentos, y realizadas las averiguaciones pertinentes, sin que adolezca la solicitud de ningún defecto, se expedirá el certificado, salvo que si los extremos que se han de certificar son objetos de recurso o el certificado no fuera conforme a resoluciones judicial que afectase a esos extremos.

4.5. Contenido

El Reglamento establece por su parte un carácter mínimo que deberá contener el certificado, sin aportar un modelo específico del mismo, siendo obligatorio:

Datos relativos a la autoridad expedidora,

- Nombre y dirección de la autoridad emisora,
- Número de referencia del expediente,
- Los extremos que fundamentan la competencia de la autoridad emisora para expedir el certificado,
- Fecha de expedición,

Datos relativos a la sucesión,

- La ley aplicable a la sucesión y los extremos sobre cuya base se ha determinado dicha ley.
- La información relativa a si la sucesión es testada o intestada, incluyendo la información sobre los extremos de los que se derivan los derechos o facultades de los herederos, legatarios, ejecutores testamentarios o administradores de la herencia.

Datos relativos al causante, causahabiente y/o tercero

- Datos del solicitante, del causante y beneficiarios.
- Cuando proceda, información sobre la naturaleza de la aceptación o renuncia de la herencia de cada beneficiario.
- La parte alícuota correspondiente a cada heredero y, cuando proceda, el inventario de los derechos y/o bienes que corresponden a cada heredero determinado.
- El inventario de los derechos y/o bienes que corresponden a cada legatario determinado.
- Las limitaciones de los derechos del heredero o los herederos y, en su caso, del legatario o los legatarios en virtud de la ley aplicable a la sucesión o de una disposición *mortis causa*.
- Las facultades del ejecutor testamentario o del administrador de la herencia y sus limitaciones en virtud de la ley aplicable a la sucesión o de una disposición *mortis causa*.

4.6. Efectos

Una vez emitido, la principal consecuencia que produce es que el certificado surtirá sus efectos en todos los Estados miembros sin necesidad de ningún procedimiento especial⁶².

Se presumirá que el certificado prueba los extremos que han sido acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o, con cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia⁶³.

Se presumirá que la persona que figure en el certificado como heredero, legatario, ejecutor testamentario o administrador de la herencia tiene la cualidad indicada en él, o

⁶² Recogido en el art. 69.1 del propio Reglamento.

⁶³ Véase art. 69.2 del Reglamento.

es titular de los derechos o de las facultades que se expresen sin más condiciones o limitaciones que las mencionadas en el certificado⁶⁴.

Así mismo, el certificado será un título válido para la inscripción de la adquisición hereditaria en el registro competente de un Estado miembro⁶⁵.

La autoridad emisora conservará el original del certificado y entregará una o varias copias auténticas al solicitante y a cualquier persona que demuestre un interés legítimo. Estas copias auténticas tendrán un plazo de validez limitado a seis meses que se hará constar en ellas mismas, especificando su fecha de expiración.

4.7. Procedimiento

Dada la importancia del certificado, procedimentalmente debe ofrecer una serie de garantías comparables a sus efectos. Estas garantías deben ser similares a las que tienen los instrumentos nacionales cuyo fin comparten.

Esta garantía parte de la base de que la autoridad competente tiene la facultad para llevar a cabo de oficio todas las verificaciones que estime oportunas. Por tanto, existen como en todo procedimiento una serie de derechos y requisitos, siendo éstos: derecho de audiencia a los interesados, derecho a conocer sobre la solicitud por los interesados, derecho a participar en el proceso de solicitud realizando todas las observaciones que estimen pertinentes, y finalmente el requisito de publicidad⁶⁶ que deberá estimar cada Estado miembro.

4.7.1. Problemática formal del certificado

Una vez expedido, si el certificado tiene algún error material deberá rectificarse, y si adolece de otro tipo de error, debe retirarse⁶⁷.

⁶⁴ Véase art.69.3 y 69.4 del Reglamento.

⁶⁵ Art. 69.5 del Reglamento.

⁶⁶ Véase art. 8 de la Convención de la Haya

⁶⁷ Véase art. 71 del Reglamento.

Tal y como queda en el Reglamento:

- *“La autoridad emisora deberá rectificar el certificado, de oficio o a petición de cualquier persona que demuestre tener un interés legítimo, en caso de error material.”*
- *“La autoridad emisora deberá modificar o anular el certificado, a petición de toda persona que demuestre tener un interés legítimo o, si ello es posible en virtud del Derecho nacional, de oficio, cuando se haya acreditado que el certificado o extremos concretos del mismo no responden a la realidad.”*
- *“La autoridad emisora comunicará sin demora a todas las personas a las que se entregaron copias auténticas del certificado, cualquier rectificación, modificación o anulación del mismo.”*

Por último, en el art. 73 del Reglamento se alude a la posibilidad de *“suspensión de los efectos del certificado”*. Sus efectos podrán ser suspendidos por la autoridad emisora, a instancia de cualquier persona que demuestre tener un interés legítimo, en tanto se procede a modificar o anular el certificado, o el órgano judicial, a instancia de cualquier persona que tenga derecho a recurrir la decisión adoptada por la autoridad emisora, en tanto se sustancia dicho recurso. Ambos deberán comunicarlo a todos aquellos que tenga copia del certificado y mientras dure la suspensión no podrán expedirse otras copias auténticas del certificado.

4.7.2. Recurso frente a la emisión

La cuestión de las vías de recurso frente a la emisión del certificado viene recogida también en el Reglamento, más concretamente en su art. 72, donde se establece que *“toda persona que tenga derecho a solicitar un certificado podrá recurrir las decisiones tomadas por la autoridad emisora en virtud del art. 67 (Expedición del certificado).”*

Asimismo, *“toda persona que demuestre tener un interés legítimo podrá recurrir las decisiones tomadas por la autoridad emisora en virtud de los arts. 71 (Rectificación, modificación o anulación del certificado) y 73, apartado 1, letra a) del Reglamento (suspensión por modificación o anulación del certificado).”*

“El recurso se interpondrá ante un órgano judicial del Estado miembro de la autoridad emisora, de conformidad con la ley de dicho Estado.” Aquí una vez más, el Reglamento permite que cada Estado sea el que determine el procedimiento que ha de seguirse específicamente para la tramitación del recurso frente al certificado emitido.

Y al final, *“Si, como consecuencia del recurso, resultare acreditado que la negativa a expedir el certificado era injustificada, el órgano judicial competente expedirá el certificado o garantizará que la autoridad emisora vuelva a examinar el caso y tome una nueva decisión.”*

5. Conclusiones

- Acertadamente el legislador europeo ha buscado englobar desde todos los aspectos la regulación de las sucesiones internacionales con este instrumento comunitario.

- La designación de una norma de conflicto común permite dotar de seguridad jurídica tanto al testador a la hora de testar como a sus herederos a la hora de la sucesión.

- La designación como punto de conexión de la residencia habitual favorece la sucesión ya que es más razonable concluir que el causante estará más vinculado a su lugar de residencia que a su nacionalidad, permitiendo mejorar la movilidad y la integración de los ciudadanos en otros Estados miembros.

- La gran flexibilidad que muestra el Reglamento a la hora de dar soluciones a cada cuestión dentro de la sucesión es otra gran ventaja, como la gran flexibilidad que supone el Reglamento a la hora de determinar la ley aplicable. Ejemplo de esto son la posibilidad de elección de ley por *professio iuris*, ya sea de manera expresa o tácita. Y supone una gran novedad favoreciendo positivamente la planificación de la sucesión, o la cláusula de vínculos más estrechos, evitando posibles resultados irracionales.

- La conexión residencia habitual también puede generar problemas, como puede ser su determinación. No obstante, la flexibilización provocada por la *professio iuris* y el foro de necesidad consiguen solventar estos problemas.

- La *professio iuris*, posibilita subsanar situaciones irracionales provocadas por el punto de conexión “residencia habitual”, como la de que el causante tenga a su familia o propiedades en el Estado en que nació, permitiendo la posibilidad de elección por parte del causante de su ley nacional, siendo un segundo punto de conexión.

- Como se ha visto, entre los Estados miembros sigue vigente la normativa fiscal y sucesoria propia de cada uno, habiendo grandes desigualdades entre ellos. La posibilidad de elección puede llevar a situaciones de fraude en las cuales la ley elegida sea la más beneficiosa, buscando el causante establecer su residencia donde hay menos restricciones a su facultad de disposición (legítimas) o la evasión de impuestos.

- La forma de resolver la cuestión de los Estados plurilegislativos en el Reglamento, eligiendo el sistema subsidiario frente al sistema directo de la Propuesta, permite que haya mayor certeza en la tramitación de la sucesión, más cuando la ley designada sea la de un tercer Estado. En el caso de España, el sistema de la Propuesta generaba cierta desigualdad respecto al resto de Estados, ya que se aplicaba sólo parte del art. 9.8 CC, rompiendo la unidad del sistema de conflicto, y por otro lado suponía una gran incertidumbre para aquellos ciudadanos españoles residentes en otros Estados que quisieran ejercitar la *professio iuris*.

- La existencia de un certificado sucesorio unitario viene ya de lejos. El certificado sucesorio europeo y su regulación supone un gran avance en la resolución de problemas prácticos en materia sucesoria para los Estados miembros, siendo un complemento indispensable del Reglamento. El certificado permite legitimar a los herederos o legitimarios frente a terceros en el ámbito europeo, y desarrolla las llamadas sucesiones intracomunitarias. En el caso de España, no se hace necesario un procedimiento *ad hoc* si no simplemente una adaptación del procedimiento actual para documentos sucesorios, encontrando menos dificultades que en otros países.

- Por último, habría que señalar, como elemento altamente negativo que, en algunos aspectos como la solución al reenvío, la excepción de orden público y, la cuestión de los Estados plurilegislativos el Reglamento es oscuro en cuanto a su redacción y plantea problemas de interpretación que en nada contribuyen a la armonización de soluciones en el ámbito de la Unión Europea.

6. Bibliografía

- ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., “La *professio iuris* y la sucesión internacional en una futura reglamentación comunitaria”. Estudios jurídicos en memoria del profesor José Manuel Lete del Río / coord. Por María Paz García Rubio, 2009, ISBN 978-84-470-3241-9, págs. 17-50.
- ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., “Las legítimas en el reglamento sobre sucesiones y testamentos”, Anuario español de derecho internacional privado, ISSN 1578-3138, Nº. 11, 2011, págs. 369-406.
- BOROMI, A., “La loi applicable aux successions dans le nouveau droit international privé italien et ses implications dans les relations italo-suisses”, RSDIE, 1996, pp. 479-504.
- CALVO VIDAL, I.A., “El Derecho de Sucesiones de la Unión Europea. Ley aplicable y carácter universal de la nueva normativa en materia de sucesiones”. Noticias de la Unión Europea, ISSN 1133-8660, Nº 328, 2012 (Ejemplar dedicado a: 150 aniversario de la Ley del Notariado), págs. 97-107.
- CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., “Desarrollo judicial y Derecho internacional privado, Comares”, Granada, 2004, pp. 151-156.
- CARRASCOSA GONZALEZ, J., “Reglamento sucesorio europeo y residencia habitual del causante”. Cuadernos de Derecho Transnacional (marzo 2016), ISSN 1989-4570, Vol. 8, Nº 1, pp. 47-75.76-5880.
- CASADO ROMÁN, J., “La nueva regulación comunitaria en materia de sucesiones” Actualidad Civil, nº2, Sección A fondo, ISSN 0213-7100. Febrero 2013, p.187.
- *Convenio sobre la Ley Aplicable a las Sucesiones por causa de Muerte* (Haya, 1 de Agosto de 1989).

- DÖRNER, H. y LAGARDE, P. “*Étude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions dans les Etats membres de l’Union Européenne. Étude pour la Commission des Communautés Européennes*”. Direction Générale Justice et Affaires intérieures.
- ESPINAR VICENTE, J.M., “Nacionalidad”, Enciclopedia Jurídica Básica, Civitas, Madrid, 1995, pp. 4379-4385.
- ESPINAR VICENTE, J.M., “Residencia habitual (Derecho internacional privado)”, Enciclopedia Jurídica Básica, Civitas, Madrid, 1995, pp. 58.
- ESPINAR VICENTE, J.M., *Comentarios al Código Civil*. Capítulo art. 9.8 CC. ISBN 978-84-9014-830-3. Editorial Aranzadi. Edición 2013.
- ESPINAR VICENTE, J.M., *Tratado elemental de Derecho internacional Privado*, Universidad de Alcalá, Madrid, 2008.
- FONTANELLAS MORELL, J.M., “La professio iuris a las puertas de una reglamentación comunitaria”. Dereito: Revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela. ISSN 1132-9947, Vol. 20, Nº 2, 2011, págs. 83-129.
- GARCÍA CUETO, E., “Algunos apuntes sobre la Propuesta de Reglamento Europeo de Sucesiones y el certificado sucesorio europeo” La Notaria, ISSN 0210-427X, Nº. 4, 2011, págs. 127-138.
- GIMENO GÓMEZ-LAFUENTE, J.L. “El certificado sucesorio europeo” Registrador de la Propiedad. Doctor en Derecho. Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, ISSN 0210-0444, Año nº 90, Nº 741, 2014, págs. 113 a 151.
- KOLLEWIJN, R.D., “Degenerazione del principio di nazionalità nel diritto internazionale privato moderno”, DI, 1959, vol.XIII, pp. 508-525.
- LAFUENTE SÁNCHEZ, R., “Hacia un sistema unitario europeo en materia de ley aplicable a las sucesiones”. Cuadernos de derecho transnacional, ISSN-e 1989-4570, Vol. 5, Nº. 2, 2013, págs.350-370.

- LAGARDE, P., “Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain”, RCADI, 1986, vol.196, pp. 9-238, esp. p. 108.
- LAGARDE, P., “Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions”, RCDIP, 2012-IV, pp. 691-732.
- *Libro Verde: Sucesiones y testamentos*. [COM (2005) 65 final], 2005.
- LONG, J.V., “Domicil vs. Nationality”, RabelsZ., 1953, pp. 247-262.
- LOUIS-LUCAS, P., “Existe-t-il une compétence générale du droit français pour le règlement des conflits de lois?”, RCDIP, 1959, pp. 405-441.
- QUINZÁ REDONDO, P. y CHRISTANDL, G., “Ordenamientos plurilegislativos en el Reglamento (UE) de Sucesiones con especial referencia al ordenamiento jurídico español”. Revista para el Análisis del Derecho, ISSN-e 1698-739X, Nº 3, 2013, 27 págs.
- RENTERÍA AROCENA, A., “El reconocimiento de decisiones extranjeras y las sucesiones *mortis causa*. El certificado sucesorio europeo.” Jado: boletín de la Academia Vasca de Derecho, ISSN 1888-0525, Año 12, Nº. 25, 2013, págs. 7-112.
- REQUEJO ISIDRO, M., “El certificado sucesorio (o de heredero) europeo: propuestas de regulación”. Diario La Ley, ISSN 1989-6913, Nº 7185, 2009.
- RODRÍGUEZ BENOT, A., “La acreditación de la cualidad de heredero de una herencia internacional: el certificado sucesorio europeo”. Perspectivas del derecho sucesorio en Europa: congreso organizado por la Universitat d'Andorra y el Departamento de Derecho y Economía Internacionales de la Universidad de Barcelona, Sant Julià de Lòria (Principado de Andorra), 29 y 30 de noviembre de 2007 / coord. por Ramón Viñas Farré, Georgina Garriga Suau, 2009, ISBN 978-84-9768-676-1, págs. 175-218.

- RODRÍGUEZ-URÍA SUÁREZ, I., “La ley aplicable a las sucesiones mortis causa en el Reglamento (UE) 650/2012”. *Revista para el Análisis del Derecho*, ISSN-e 1698-739X, N° 2, 2013.
- RODRÍGUEZ-URÍA SUÁREZ, I., “La propuesta de reglamento de sucesiones y testamentos y su posible aplicación al derecho interregional: especial consideración de los pactos sucesorios”. *Anuario español de Derecho Internacional Privado*. ISSN 1578.3138, N° 10,2010, págs. 639-655.
- SCHURIG, K., “Das internationale Erbrecht wird europäisch: Bemerkungen zur kommenden Europäischen Verordnung, en Festschrift für Ulrich Spellenberg, a cura di J”. *Bernreuther e altri*, München, 2010, p. 343 ss.
- VELAZQUEZ SANCHEZ, M.M., “Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia...”. *AIS: revista europea e iberoamericana de pensamiento y análisis de derecho, ciencia política y criminología*, ISSN-e 2340-5155, Vol. 1, N° 1, 2013, págs. 190-193.

7. Sentencias mencionadas

- STS n° 887/1996, Sala 1ª, de 15 de Noviembre, RJ 1996/8212.
- STS n° 436/1999, Sala 1ª, de 21 de Mayo, RJ 1999/4580.
- STS n° 849/2002, Sala 1ª, de 23 de Septiembre, RJ 2002/8029.
- Sentencia del TCE, de 24 de mayo de 2011 (recurso C-54/08).